

to es la Ley de Donaciones Culturales, aprobada en junio de 1990 con la Reforma Tributaria. Esta ley (conocida también como Ley Valdés por el rol que tuvo en ella el entonces presidente del Senado, Gabriel Valdés) estimula —por la vía de ciertos descuentos tributarios— las donaciones del sector privado al desarrollo de la cultura. También se ha reorientado y ampliado el sistema de premios de resorte público, a través de la Ley de Premios Nacionales (1992) que aumentó la cantidad de premios a once, incrementando sus montos y modificando la composición del Jurado.

FONDARC ha sido una iniciativa de gran importancia, puesto que permite apoyar proyectos en todas las áreas, incluso proyectos de cultura local o popular. Como en todo concurso que se precie en éste también ha habido reclamos de postulantes que no han quedado seleccionados o a quienes no se les dio todo el presupuesto solicitado. No cabe duda, sin embargo, de que los criterios de selección podrán irse perfeccionando y que el Fondo será incrementado. En cuanto a Premios Nacionales, a pesar de que la Ley se modificó y se dio mayor pluralidad a los jurados, hay ciertos premios que resultan incomprensibles. Por ejemplo, el Premio Nacional de Periodismo 1993 que fue otorgado a la editora de un vespertino de derecha, un diario propinchoetista que durante el régimen pasado tuvo una actitud ambigua frente a las violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Como esta editora prácticamente no tiene una columna propia, el Premio se entendió como un premio al diario, lo que resulta, a estas alturas, incomprensible, pues los premios de resorte público deberían servir para estimular y jerarquizar valores. La Ley de Donaciones Culturales, si bien abre un camino de enormes posibilidades, no ha funcionado todo lo bien que se esperaba. La iniciativa era excelente, pero los beneficios y rebajas tributarias que otorga son demasiado magros, lo cual ha redundado en cierta falta de interés por parte del sector privado. Tiene también algunos vacíos producto del apresuramiento con que fue redactada.

Lo sucedido con la Ley Valdés se debe, en gran medida, a que el Estado cuenta actualmente con una diversidad de instancias de formulación e implementación de políticas culturales, repartidas en distintos ministerios, sin que exista una instancia coordinadora o un organismo superior, que permita conducir con mayor coheren-

cia y eficacia las políticas y acciones del sector público en el campo cultural. Se trata de un tema que estaba también considerado en el Programa de 1989, pero que no se ha implementado por discrepancias en el interior de la concertación. En efecto, el sector que durante el gobierno de Aylwin manejó la Secretaría de Comunicaciones y Cultura, y que se ubica más bien en el PPD y en un liberalismo suspicaz frente a toda incrementación del Estado, se opuso tenazmente a esta instancia de coordinación u organismo superior, viendo en ella el peligro del dirigismo cultural y de la burocracia ineficiente, y argumentando que la dispersión actual permitiría mayor heterogeneidad y diversidad, mayor presencia de la sociedad civil, vale decir haciendo una lectura posmoderna de la misma. Fue un sector que se jugó en el campo de la cultura y las comunicaciones por una gestión pública liviana (*light?*) y descentralizada, respetuosa de la iniciativa privada y sustentada en la creación de espacios más que en la oferta de servicios.

Cierta ideologización de esta postura es tal vez la responsable de la poca atención que se le prestó al patrimonio cultural, área atendida sólo muy parcialmente durante el gobierno que termina. En efecto, existe cierto consenso —y así lo señala el programa del nuevo gobierno— respecto a la necesidad de una política integral y moderna para la protección, valorización, fomento y difusión del patrimonio cultural del país (arqueológico, histórico, arquitectónico, escrito, audiovisual, artístico, antropológico y social); una política que reforme y ponga al día la institucionalidad y el marco legal con que operan las políticas públicas vigentes, una política que diseñe fórmulas creativas, combinando el esfuerzo público con la participación privada y el aporte comunitario e individual.

En síntesis, se puede decir que en lo cultural el gobierno de la transición ha cumplido en alto grado lo que señalaba su programa, y que en general lo ha cumplido con ecuanimidad, amplitud y sin sectarismos. Ahora bien, a pesar de este balance positivo nos parece que la vida cultural durante este período ha sido chata, carente de vuelo, pasiva, sin núcleos de energía cultural, saturada por la cultura de masas y por un ambiente poco propicio al pensamiento crítico, a los sueños y riesgos de la imaginación. Ello, por supuesto, no es atribuible al gobierno, más bien lo es a la sociedad y a nosotros mis-

mos. Además, la vida cultural es mucho más compleja que los decretos o las leyes culturales. En relación a este tema hay, sin embargo, una suerte de eslabón trágico: no nos cabe duda de que la única manera de que la transición tuviera el éxito político que tuvo —y alejara el fantasma de la dictadura— era siguiendo la estrategia que siguió. Una estrategia de enfriamiento de los conflictos y de búsqueda de consensos. Pregúntese, empero, el lector, cuáles serán las consecuencias culturales de esta estrategia en un país como el nuestro. En un país que arrastra un déficit histórico de espesor cultural, y cuya cultura ha sido, en gran medida, una suerte de subproducto o vagón de cola de la política y de las utopías sociales.

## Bernardo Subercaseaux

### *Carta de México*

# El Tratado de Libre Comercio

**E**n las navidades de 1982 volví a México después de vivir varios años en Nueva Inglaterra. Durante el tiem-

po que estuve allí seguí muy de cerca, a través de lo que leía en los periódicos y en algunas revistas, los procesos de consolidación de la Comunidad Europea. Regresé a mi país con la sensación de que el mundo empezaba a entrar en una nueva era histórica. Incluso llegué a pensar que las transformaciones que se estaban dando eran tan importantes como las que se dieron a finales del siglo XV, no sólo por lo que significaba la unión europea y los avances en la tecnología —la computación, las telecomunicaciones, etc.), sino también por el fracaso de las utopías totalitarias, y con esto último la resignificación y la revaloración del individuo ante la sociedad. En una entrevista publicada en una revista mexicana, en 1984, mucho antes del derrumbamiento del muro de Berlín, llegué a decir, sin un afán de profecía, que «empezábamos a vivir una era post-utópica» ya que cada una de las utopías de nuestro siglo habían caído «como la manzana de Newton, por la gravedad de los dogmas».

Pensaba, y lo sigo pensando, que lo que entendemos como modernidad, ese gran período que se inicia en Occidente en el Renacimiento y que tuvo dos proyectos básicos a lo largo de los siglos, la Reforma y la Contrarreforma, forzosamente tenía que concluir con la conciliación de los mismos, y que el camino para hacerlo era instituir prácticas democráticas en aquellos países con una herencia totalitaria, es decir, aceptar las diferencias y legislarlas. Al ver la manera en la que los países con un pasado reformista se integraban con aquellos otros con uno contrarreformista, para conformar una comunidad de naciones, me hacía creer que esa hipótesis podía ser cierta. Esas meditaciones me llevaron a la vez a preguntarme si la forma en la cual Hegel había concebido el Estado-Nación seguía siendo vigente. En algunas lecturas encontré una respuesta. Para mi sorpresa, esa idea —tal como me lo suponía— empezaba a desmoronarse. La idea de Estado-Nación comenzaba a ser suplantada por otra, basada en las relaciones mutuas entre las diferentes naciones que conforman una comunidad.

Al llegar a México aquellas navidades encontré a mi país en bancarrota, provocada en parte por las políticas populistas que se habían llevado a cabo durante los últimos dos gobiernos, así como también por problemas acumulados que durante el siglo habían sido mal resueltos. Muchas veces, en el pasado, intentando resolver un problema, habían creado varios, como fue el caso del cam-

po. La expropiación de la tierra en las zonas rurales nunca eliminó la miseria de los campesinos, pero hizo que éstos emigraran ya fuera a la Ciudad de México, creando cordones inmensos de pobreza —y con esto, sobrepoblación, desempleo, contaminación, gasto en urbanizaciones y excesivo centralismo—, o hacia los Estados Unidos. Tanto las políticas populistas de los recientes regímenes como los males heredados por décadas, lograron que a principios de los años ochenta los índices de inflación y de devaluación de la moneda fueran alarmantes. El endeudamiento tanto externo como interno batió récord en toda nuestra historia. La fuga de capitales, el aumento del desempleo, la parálisis en la economía, el exceso de burocracia, las repetidas nacionalizaciones de empresas y de bancos productivos, la corruptela y la pobreza, presentaban un panorama verdaderamente aterrador. Parecía que el país tenía una vocación innata para mantenerse para siempre en el subdesarrollo y que la responsabilidad caía, en gran medida, en la colectividad. Después del crack de la economía mexicana en 1982, el nivel de vida de la población cayó como nunca había caído. Por ejemplo, un profesor universitario, que acostumbraba a ganar dos mil dólares al mes, empezó a percibir trescientos o cuatrocientos. En los supermercados empezaron a escasear incluso los productos básicos. Todos los artículos de importación necesarios para el funcionamiento de industrias, laboratorios, hospitales, etc. desaparecieron.

Al poco tiempo de llegar a México empecé a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras. El discurso de gran parte de las personas que encontraba a mi paso seguía siendo igual al de la década anterior. Cualquier crítica que se hiciera, por más pequeña que ésta fuera, podía generar ira o silenciosas persecuciones por parte de aquellos grupos que atribuían todos los males del país a extrañas confabulaciones internacionales o por aquellos otros que insistían en dar soluciones basadas en las doctrinas marxista-leninistas. Preocupado por la situación medité mucho sobre México y su historia, sin tomar en cuenta la forma en la que habían fracasado las mismas en los países donde habían sido impuestas. En algunos libros, como *Ulises criollo* de José Vasconcelos, encontré paralelos entre el México anterior a la revolución y el que nos estaba tocando vivir en aquel momento. En una ocasión, ante un grupo de estudiantes y otras

personas, dije que el futuro de México era crear una comunidad económica con Estados Unidos y Canadá, tal como lo habían hecho los países europeos. Mi comentario causó malestar. Me miraron como si hubiera profanado la esencia más profunda del ser mexicano. Muchos de mis estudiantes dejaron de asistir a clases y durante varias semanas recibí llamadas telefónicas anónimas con insultos. Poco tiempo después dejé México por dos años.

Mientras tanto, con el nuevo gobierno de Miguel de la Madrid, las cosas empezaron a cambiar poco a poco. La crisis había producido un efecto positivo. La mayoría de la población, ante la necesidad, aceptó el cambio. Toda una serie de reformas casi invisibles prepararon el camino para una transformación mucho más radical llevada a cabo en el actual gobierno: en primer lugar, la renegociación de la deuda externa y la disminución de los índices de inflación y devaluación de la moneda a cifras que han creado una estabilidad económica, como no había tenido el país en varias décadas; más tarde, cierta mejoría en el nivel de vida. Esto fue logrado gracias a una serie de reformas entre las cuales habría que mencionar: la privatización masiva de empresas paraestatales, de bancos e incluso de la tierra en el campo. Algunas de esas reformas habían sido tabús durante muchas décadas. Gran parte de la historia posrevolucionaria se había basado en dogmas relacionados a la excesiva participación del Estado. También se crearon leyes para reactivar el sector privado y se iniciaron programas de orden social que en muchos casos han servido de ejemplo para otros países con problemas semejantes. A pocos meses de las próximas elecciones para la presidencia, me atrevería a decir —sin nunca haber participado en el Estado, ni haber representado como escritor a México en los faraónicos festejos literarios que se han celebrado en el extranjero—, que el actual gobierno ha sido uno de los mejores que hemos tenido desde nuestra Independencia. Y con esto no quiero decir que muchas cosas no puedan ser criticables. Después de una larga crisis de diez años, el país parece que se ha preparado para entrar en el nuevo milenio con una economía más sana y una reputación internacional decorosa. Desde luego, hay mucho camino que recorrer todavía. El próximo gobierno, además de continuar con la política económica y social hasta ahora llevada, tendrá que continuar con las reformas en muchas otras áreas. Por ejemplo, en la